TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO

SENTENCIA pronunciada en el expediente agrario número TUA/87/96, del poblado Pedro C. Colorado, Municipio de Huimanguillo, Tab., para emitir resolución definitiva de acuerdo a la sentencia emitida dentro del recurso de queja número 65/997, dictada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Tribunal Unitario Agrario.- Secretaría de Acuerdos.- Distrito 29.- Villahermosa.

Vistos los autos que integran el expediente citado al rubro, para emitir resolución definitiva, de acuerdo a la sentencia emitida dentro del recurso de queja número 65/997, dictada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, con residencia en esta ciudad, y

RESULTANDO:

PRIMERO.- El día primero de julio de mil novecientos noventa y siete, este Tribunal Unitario Agrario del Distrito Veintinueve emitió resolución definitiva dentro del expediente agrario número TUA/87/96, y resolvió que resultó improcedente la acción intentada por Clara Alpuche viuda de Alvarado porque se estimó que las controversias relativas a los terrenos salidos del régimen de propiedad ejidal por expropiación era competencia de los Tribunales Civiles y por lo tanto no se le reconocía como sucesora de los derechos agrarios que fueron del finado ejidatario Santiago Alvarado Rosaldo.

SEGUNDO.- Inconforme con dicha sentencia, Clara Alpuche viuda de Alvarado interpuso recurso de queja ante el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, el cual con fecha veinte de marzo de esta nulidad emitió su fallo, y en su punto resolutivo primero, declaró fundado el recurso de queja, por defecto en el cumplimiento de una ejecutoria de amparo, ya que estimó que existió defecto en el cumplimiento de la ejecutoria dictada dentro del juicio de amparo directo número 766/996, emitida por ese propio Tribunal Colegiado.

TERCERO.- Mediante auto de fecha veintisiete de marzo, de mil novecientos noventa y ocho, este órgano jurisdiccional, en acatamiento al fallo de mérito, dejó insubsistente la sentencia combatida y ordenó emitir una nueva resolución siguiendo los lineamientos plasmados en la ejecutoria pronunciada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, en el juicio de amparo directo número 766/996. Se notificó el auto a las partes.

Atento a lo anterior, se formulan los siguientes;

CONSIDERANDOS:

I.- Este Tribunal Unitario Agrario Distrito 29 es competente para conocer y resolver el presente juicio agrario, de conformidad con los artículos 27 fracción XIX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1o., 2o., 163, 167, 185 y 189; y tercero transitorio de la Ley Agraria en vigor; 1o., 2o., fracción II y quinto transitorio de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios; y el artículo 104 de la Ley de Amparo.

II.- La sentencia que se cumplimenta declaró fundado el recurso de queja que interpuso Clara Alpuche viuda de Alvarado, y queda obligado este Tribunal Unitario Agrario a emitir una nueva resolución que dé cumplimiento a la ejecutoria pronunciada por ese mismo Primer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, en el juicio de amparo directo número 766/996, se efectúe un nuevo análisis del asunto, tomando en cuenta tanto el decreto expropiatorio y lo considerado al respecto por la Comisión Agraria Mixta en su resolución, así como los agravios que en su contra expresó, la quejosa, además las pretensiones deducidas en el juicio, y valore todas y cada una de las pruebas aportadas, tanto en lo individual como en su conjunto, fundando y motivando su conclusión, y con libertad de jurisdicción resuelva lo que en derecho proceda.

III.- Se considera prudente formular el siguiente resumen, para una mejor comprensión del asunto planteado y de las constancias que obran en autos se advierte: Por Resolución Presidencial de fecha veintinueve de noviembre de mil novecientos setenta y seis, emitida dentro del juicio de privación de derechos agrarios y nuevas adjudicaciones de unidades de dotación en el ejido "Pedro C. Colorado", de Huimanguillo, Tabasco, se privó de los mismos, entre otros, a Santiago Alvarado Rosaldo y sucesores ordenándose la cancelación de su certificado de derechos agrarios número 101132, por haber abandonado el cultivo personal de su unidad de dotación por más de dos años consecutivos, de acuerdo a lo estipulado por el artículo 85 fracción I, de la entonces vigente Ley Federal de Reforma Agraria y proponiéndose como nuevo adjudicatario a Leobardo Santiago López; en contra de esa resolución, Santiago Alvarado Rosaldo promovió juicio de amparo indirecto, número 251/77 ante el Juzgado Primero de Distrito en el estado, quien con fecha cinco de julio de mil novecientos setenta y siete le negó la protección federal solicitada; inconforme con ese fallo, el quejoso interpuso recurso de revisión del que conoció el Primer Tribunal Colegiado, toca número 345/978, y mediante ejecutoria de seis de septiembre de mil novecientos setenta y ocho le concedió la protección solicitada, ya que estimó que el acta de desavecinidad levantada el seis de diciembre de mil novecientos setenta y cuatro no fue firmada por el representante de la Comisión Agraria Mixta en el estado; para el efecto de que se dejara insubsistente la Resolución Presidencial, únicamente en lo que toca al promovente del amparo y se repusiera el procedimiento. Por Decreto Presidencial del veintiuno de diciembre de mil novecientos setenta y nueve, publicado en el **Diario Oficial de la Federación** el cuatro de febrero del año siguiente, por causa de utilidad pública superior a la social del ejido, fue expropiada en favor de la Comisión para la regularización de la Tenencia de la Tierra mediante el pago de la indemnización correspondiente, una

superficie de 40-86-27 has., de terrenos del ejido "Pedro C. Colorado", de Huimanguillo, Tabasco; habiéndoseles solicitado a esa Comisión, documentación relativa al plano en que constaba la superficie expropiada a fin de determinar si se encontraba la parcela ejidal de Santiago Alvarado dentro de dicho polígono, y manifestara si se había cubierto la indemnización respectiva; la autoridad requerida informó que aún no había pagado la indemnización aludida y anexó el plano solicitado.

Clara Alpuche exhibió copia certificada del acta de defunción, en la que consta que Santiago Alvarado Rosaldo falleció el veintiuno de septiembre de mil novecientos ochenta y uno, por lo que solicitó que se le reconociera el carácter de sucesora preferente de su extinto esposo, lo que se acordó favorable. La Delegación Estatal de la Secretaría de la Reforma Agraria, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo comisionó personal de su adscripción para que cumplimentaran la reposición del procedimiento y se levantara el acta de desavecindad respecto a Santiago Alvarado Rosaldo; en asamblea de ejidatarios se manifestó que el citado Alvarado Rosaldo se ausentó del lugar desde hace más de veinte años y se dijo que la parcela de 2-00-00 hectáreas que tenía asignada, la trabajaba Mateo García Salaya, por lo que con fecha doce de julio de mil novecientos sesenta y seis se le adjudicó, y que en forma arbitraria y por la fuerza, Nicolás, Miguel, Carmen, Félix y Román Alvarado Alpuche se introdujeron en la parcela de mérito construyendo una casa. La Comisión Agraria Mixta en el Estado mediante acuerdo de fecha veintidós de marzo de mil novecientos ochenta y dos dejó insubsistente la Resolución Presidencial del veintinueve de noviembre de mil novecientos setenta y seis, ordenó la reposición del procedimiento de privación referente a Santiago Alvarado Rosaldo, y registró el expediente bajo el número 125-III.

Las autoridades internas del ejido ofrecieron las pruebas que creyeron pertinentes y anexaron el decreto expropiatorio agregando que la parcela en litigio resultó afectada en su totalidad, por lo que el juicio podía quedar sin materia. La Comisión dictó su resolución definitiva el treinta de septiembre de mil novecientos ochenta y cinco, y por fallecimiento del referido Santiago Alvarado Rosaldo ordenó cancelar el certificado de derechos agrarios número 101132, y además privar de sus derechos sucesorios a Clara Alpuche viuda de Alvarado y Julio Alvarado Alpuche por haber dejado de trabajar la unidad de dotación por más de dos años consecutivos, conforme a lo establecido por el artículo 85 fracción I de la Ley Federal de Reforma Agraria; y toda vez que la parcela en disputa está comprendida dentro de la superficie expropiada al ejido de referencia, por causas de utilidad pública y en favor de la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra, señaló que el ejido "Pedro C. Colorado", sería el beneficiario de la indemnización correspondiente con motivo de la expropiación mencionada, y que respecto a la casa habitación que poseía Clara Alpuche, sería la citada Comisión la que resolvería lo conducente.

Inconforme con la citada resolución, Clara Alpuche viuda de Alvarado interpuso recurso de inconformidad ante la Consultoría Regional del Sureste del Cuerpo Consultivo Agrario, con sede en la ciudad de Campeche, Campeche, quien lo admitió por auto de fecha veinte de enero de mil novecientos ochenta y seis. Por acuerdo de dieciséis de febrero de mil novecientos noventa y seis, el Cuerpo Consultivo Agrario, Consultoría Titular, con residencia en la ciudad de México, Distrito Federal, declaró que dicho Cuerpo Colegiado ya no era competente para conocer el citado recurso de inconformidad, en virtud de las reformas al artículo 27 constitucional y expresó que son competentes ahora los Tribunales Unitarios Agrarios, por lo que remitió los autos al Tribunal Superior Agrario para que lo derivara al Tribunal Unitario respectivo. Se remitió el expediente sujeto a estudio a este Tribunal Agrario el diez de abril de mil novecientos noventa y seis, se dictó auto de radicación y los integrantes del Comisariado Ejidal y Consejo de Vigilancia del ejido "Pedro C. Colorado", manifestaron que no tenían interés en el asunto. También se comunicó la radicación del asunto ante este Tribunal Agrario a la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra, exponiendo que del estudio del expediente se constataba que dentro de la superficie expropiada a su favor, se encontraba ubicada la parcela en conflicto, por lo que dicha Comisión por conducto de su apoderado legal adujo que la superficie reclamada fue expropiada a favor de su representada, sustrayéndola del régimen ejidal y, por lo tanto, el Tribunal Agrario era incompetente por que ya no se surtía a su favor la competencia establecida por el artículo 27 fracción XIX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Este órgano jurisdiccional dictó la resolución correspondiente al veintiocho de mayo de mil novecientos noventa y seis, declarando infundados por improcedentes los agravios hechos valer por la recurrente Clara Alpuche viuda de Alvarado, en el recurso de inconformidad interpuesto el veinticinco de noviembre de mil novecientos ochenta y cinco ante la Consultoría Regional del Cuerpo Consultivo Agrario con residencia en la ciudad de Campeche, Campeche; y consecuentemente confirmó la resolución recurrida, dictada por la extinta Comisión Agraria Mixta en el Estado el treinta de septiembre de mil novecientos ochenta y cinco, dentro del expediente número 125-III, relativo a la privación de derechos agrarios individuales y nuevas adjudicaciones de unidades de dotación, del poblado "Pedro C. Colorado", municipio de Huimanguillo, Tabasco.

Mediante ocurso presentado ante este Tribunal Unitario Agrario el veintinueve de mayo de mil novecientos noventa y seis, Clara Alpuche y Miguel Alvarado manifestaron que debido a la expropiación del ejido de referencia, dentro de la cual quedó considerada la superficie de terreno que tenían en posesión (y que tienen hasta la fecha), ya que la superficie restante que conformaba la parcela, fue completamente invadida por varias personas y se ubica al lado oriente del bordo de protección existente hasta la actualidad; y que la ocursoante Clara Alpuche recibió en venta por la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra la

superficie que tenían en calidad de propietarios, por lo que el recurso de inconformidad carecía de materia por el cambio de régimen de propiedad.

Clara Alpuche viuda de Alvarado combatió la sentencia emitida por este Tribunal Unitario Agrario ante el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el amparo directo número 766/996, habiendo dictado su ejecutoria el día treinta de mayo de mil novecientos noventa y siete, concediendo el amparo y protección a la quejosa, para los efectos de que este Tribunal deje insubsistente la sentencia reclamada y emita otra en la que efectúe un nuevo análisis del asunto, tomando en cuenta tanto el decreto expropiatorio aludido y lo considerado al respecto por la Comisión Agraria Mixta en su resolución, así como los agravios que en contra de ésta expresó la quejosa y las pretensiones deducidas en el juicio, valore todas y cada una de las pruebas aportadas tanto en lo individual como en su conjunto, fundando y motivando su conclusión, y resuelve lo que en derecho proceda.

Este Tribunal Agrario emitió su fallo el día primero de julio de mil novecientos noventa y siete, considerando improcedente la acción intentada por Clara Alpuche viuda de Alvarado, ya que estimó que las controversias relativas a los terrenos salidos del régimen de propiedad ejidal por expropiación, compete a los tribunales civiles por haber cambiado su naturaleza jurídica. La quejosa interpuso recurso de queja, por defecto en el cumplimiento de una ejecutoria de amparo número 65/997, habiendo acordado el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito el veinte de marzo de mil novecientos noventa y ocho, que fue fundado el recurso de queja interpuesto por Clara Alpuche viuda de Alvarado, por defecto en el cumplimiento de una ejecutoria de amparo y queda obligado este Tribunal Unitario Agrario a dejar insubsistente la sentencia materia de ese recurso y emita una nueva resolución que dé cumplimiento a la ejecutoria pronunciada por ese Primer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito en el juicio de amparo directo 766/996, siguiendo los lineamientos puntualizados y para los efectos que en la misma se precisan.

Por auto de fecha veintisiete de marzo del presente año, y en cumplimiento de la ejecutoria antes referida, se declaró insubsistente la sentencia emitida por este Tribunal el primero de julio de mil novecientos noventa y siete y se ordenó la elaboración de una nueva resolución siguiendo los lineamientos plasmados en el fallo protector.

IV.- El recurso de inconformidad constriñe a este Tribunal Agrario a examinar la legalidad del procedimiento seguido ante la Comisión Agraria Mixta, así como de la resolución dictada por ésta, de acuerdo con los puntos de discrepancia aducidos por los inconformes y en relación con el material probatorio acumulado. Así las cosas se considera necesario señalar que en la investigación general de usufructo parcelario se levantó el acta respectiva el día veintidós de septiembre de mil novecientos setenta y cuatro, habiendo manifestado los assembleístas que varios ejidatarios y sucesores han incurrido en causas de privación de sus derechos agrarios, y entre otros mencionaron el caso número 20, cuyo titular Santiago Alvarado y sus sucesores Clara Alpuche y Julio Alvarado, y certificado número 101132, abandonaron la unidad de dotación por más de dos años, por lo que solicitaron la iniciación del juicio privativo de sus derechos, "y considerando que al quedar abandonada esta parcela el C. Leobardo Santiago López ha venido usufructuando por más de dos años, la propia asamblea propone el reconocimiento de derechos agrarios a su favor" (foja 381 de autos). Esta prueba fue la que sirvió de base para que posteriormente, en el año de mil novecientos setenta y seis se le privara de sus derechos agrarios y sucesorios. Resolución Presidencial que fue dejada sin efecto posteriormente, en virtud del amparo concedido por el Tribunal Colegiado, con residencia en esta ciudad.

Las autoridades internas del ejido, como son la asamblea de ejidatarios y los integrantes del comisariado ejidal y del Consejo de Vigilancia, solicitaron la privación de los derechos agrarios del citado Santiago Alvarado Rosaldo, así como de sus sucesores Clara Alpuche y Julio Alvarado Alpuche, originalmente desde el año de mil novecientos setenta y cuatro, como ya se vio en el párrafo que antecede; por lo que al ordenar el Tribunal de Amparo la reposición del procedimiento en su ejecutoria dictada dentro del toca número 345/978, de fecha seis de septiembre de mil novecientos setenta y ocho, la cual ordenó reponer el procedimiento, toda vez que estimó que el acta de desavecinidad levantada el seis de diciembre de mil novecientos setenta y cuatro no cumplía con los requisitos establecidos por el artículo 35 de la entonces vigente Ley Federal de Reforma Agraria, y por tal motivo las autoridades ejidales presentaron un ocurso ante el Presidente de la Comisión Agraria Mixta en el estado de fecha quince de agosto de mil novecientos setenta y nueve (fojas 155 a 161 de autos) argumentando lo siguiente:

Que debido a los trabajos de investigación y usufructo parcelario ejidal que se practicaron el día veintidós de septiembre de mil novecientos setenta y cuatro, en el ejido "Pedro C. Colorado", se constató que Santiago Alvarado Rosaldo no vivía ni cultivaba personalmente o con su familia, o por medio de ella, la parcela que le fue asignada, por lo que solicitaron, de acuerdo a lo establecido por el artículo 85 fracción I de la Ley Federal de Reforma Agraria la pérdida de los derechos agrarios sobre la unidad de dotación en conflicto y ofrecieron como pruebas de su parte las que a continuación se mencionan:

1.- Copias de la documentación levantada con motivo de la investigación de usufructo parcelario practicada el veintidós de septiembre de mil novecientos setenta y cuatro (fojas 163 a 180 de autos) en la cual como ya se vio, se solicitó la privación de Santiago Alvarado, titular del certificado 101132 y de sus sucesores Clara Alpuche y Julio Alvarado Alpuche, ya que dijeron que abandonaron la unidad de dotación por más de

dos años consecutivos, sin causa justificada. Prueba documental de la que se desprende únicamente lo ahí relatado.

2.- Copia debidamente autorizada del auto de formal prisión que se dictó en el expediente penal número 1/979 que se instruyó en contra de los C.C. Miguel, Nicolás y Félix de apellidos Alvarado Alpuche, por los delitos de daños en propiedad ajena y despojo, en perjuicio de Mateo García Salaya de fecha once de enero de mil novecientos setenta y nueve (fojas 183 a 186 íd.), documental que resulta inoperante, toda vez que se refiere a una actuación de carácter penal, del fuero común y los indiciados no son parte en este juicio; por lo demás no presentaron la sentencia que se hubiere dictado al respecto.

3.- Copias de las actas de asambleas de ejidatarios de fechas doce de julio de mil novecientos sesenta y seis, tres de diciembre de mil novecientos setenta y ocho y treinta y uno de enero de mil novecientos setenta y nueve y diez de agosto de ese mismo año, en las cuales se manifiestan que la posesión que tiene el señor Mateo García Salaya y los conflictos con los hermanos Alvarado, hijos del citado Santiago Alvarado Rosaldo, respecto a una fracción ejidal de dos hectáreas. Escritos por los cuales se tienen por reseñadas las aseveraciones ahí señaladas.

Cabe hacer la consideración que los integrantes del comisariado ejidal y del Consejo de Vigilancia, manifiestan que el señor Mateo García Salaya es quien trabajaba la unidad parcelaria que originalmente perteneció a Santiago Alvarado Rosaldo, lo que está en franca contradicción con lo señalado en la asamblea general de ejidatarios que se llevó a cabo con motivo de la investigación de usufructo parcelario ejidal, de fecha veintidós de septiembre de mil novecientos setenta y cuatro, en la que se propuso como nuevo adjudicatario de la parcela ejidal de Santiago Alvarado al C. Leobardo Santiago López.

4.- Copia del escrito que suscribió el Delegado Catastral del Municipio de Huimanguillo el día ocho de enero de mil novecientos setenta y nueve (foja 200 íd.) por la que hace constar que Santiago Alvarado Rosaldo es propietario de un predio rústico ubicado en la rancharía "Tierra Nueva", perteneciente al Municipio de Huimanguillo, y con una superficie aproximada de 35-38-00 has. Documental por la que se demuestra únicamente lo ahí referido.

Ofrecieron también una copia de la Resolución Presidencial de fecha trece de septiembre de mil novecientos treinta y nueve, que dotó de tierras al poblado que aquí interesa, para acreditar que ésta no hace referencia a un parcelamiento de 10-00-00 hectáreas para cada uno de los campesinos beneficiados, pero dicha documental no la presentaron en el juicio.

5.- Copia de un escrito que suscribió el jefe de zona ejidal el tres de septiembre de mil novecientos sesenta (foja 201) y se le dirigió al C. Mateo García, Prueba irrelevante para demostrar el mejor derecho del citado Mateo García al predio en conflicto.

6.- Copia del curso suscrito por el Secretario General del Comité Regional Campesino, de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos, de Huimanguillo, Tabasco, de fecha trece de enero de mil novecientos setenta y nueve (foja 205 íd.), y se lo dirigió al Delegado Estatal de la Secretaría de la Reforma Agraria, manifestándole la situación que prevalece entre Mateo García Salaya y los señores Alvarado. Ocurso por el que se tienen por hechas las manifestaciones ahí reseñadas.

7.- Copia del oficio 8233, de fecha trece de diciembre de mil novecientos setenta y seis (foja 208 íd.), por el cual el Delegado Estatal de la Secretaría de la Reforma Agraria se dirigió al jefe de la Promotoría área Chontalpa, y le solicitó que comisione personal de su adscripción para que investigue efectivamente a quien le corresponde la parcela de Santiago Alvarado, ya que fue propuesto como nuevo adjudicatario Leobardo Santiago López, y según manifestación formulada por José Manuel García Alvarado dicha unidad parcelaria se le otorgó en el año de mil novecientos sesenta y seis, pero por ser menor de edad se nombró a su señor padre como su tutor, el C. Mateo García Salaya quien actualmente la tiene en posesión. Escrito por el que se tienen por realizadas las aseveraciones referidas.

8.- Copia de una constancia expedida por el Presidente Municipal de Huimanguillo, Tabasco, el día diez de agosto de mil novecientos setenta y nueve (fojas 212 de autos), y por la que hace constar que conoce a Ciriaco González González y a Mateo García Salaya desde mil novecientos cincuenta y nueve, quienes cultivan sus parcelas (sic.) asimismo conoce a Santiago Alvarado Rosaldo, Nicolás, Miguel, Félix, Carmen y Román Alvarado Alpuche, como comerciantes y que desde hace más de veinte años no tienen posesión alguna (sic.) en el ejido "Pedro C. Colorado". Prueba documental totalmente irrelevante, ya que el servidor público mencionado carece de facultades para expedir ese tipo de constancias, toda vez que rebasan sus aseveraciones en el tiempo para desempeñar su cargo, que es únicamente de tres años.

9.- Diversas promociones realizadas ante el Agente del Ministerio Público de Huimanguillo, y relativas a problemas de carácter penal entre el citado Mateo García Salaya y los hermanos Alvarado Alpuche (fojas 202 a 204 íd.), las cuales resultan inoperantes en este juicio agrario.

10.- En la audiencia de pruebas y alegatos de fecha dieciséis de octubre de mil novecientos ochenta, se presentó el C. Sebastián García Morales, en su carácter de Presidente del Comisariado Ejidal del núcleo agrario de referencia, para formular las siguientes declaraciones: que sí conoce al C. Santiago Alvarado Rosaldo desde hace como cuarenta años aproximadamente; que fue ejidatario del poblado "Pedro C. Colorado"; que desde hace aproximadamente veinte años abandonó su parcela; que tenía certificado de derechos agrarios y sus sucesores eran Clara Alpuche y Julio Alvarado Alpuche; que se le inició juicio

privativo de derechos agrarios el veintidós de septiembre de mil novecientos setenta y tres; que la parcela de la cual se le priva a Santiago Alvarado Rosaldo tiene una extensión superficial de 2-00-00 hectáreas; que cada unidad de dotación en el ejido "Pedro C. Colorado" es de 3-00-00 hectáreas, otras de 2-00-00 hectáreas y la parcela ejidal más grande es de 4-00-00 hectáreas; y como razón de su dicho dijo ser el presidente del comisariado ejidal.

En la misma audiencia de pruebas y alegatos se recibió la declaración de Maximiliano Cruz Morales, Presidente del Consejo de Vigilancia del ejido multicitado, quien declaró que tiene dos años de conocer a Santiago Alvarado, a quien se le sigue juicio privativo de derechos agrarios, ya que abandonó su parcela hace como veinte años; que no sabe por qué abandonó su parcela el C. Santiago Alvarado, ya que en ese tiempo no era ejidatario el declarante; que la parcela de Santiago Alvarado tenía 3-00-00 hectáreas aproximadamente, que el ejido de referencia fue creado en el año de mil novecientos treinta y nueve y se benefició a sesenta y tres campesinos capacitados, entre los cuales estaba el C. Santiago Alvarado Rosaldo; que hace año y medio construyeron una casa los hijos de la persona antes mencionada en la parcela de su padre Santiago Alvarado y la tienen en posesión; agregó que la parcela que fuera de Santiago Alvarado Rosaldo la está trabajando desde hace veinte años el C. Mateo García Salaya, quien entró a trabajar esa unidad de dotación por anuencia de su suegro Santiago Alvarado Rosaldo.

Las anteriores declaraciones de los presidentes del Comisariado Ejidal y del Consejo de Vigilancia, son contradictorias entre sí, respecto a la superficie de la parcela en controversia, ya que el primero manifestó que tenía 2-00-00 hectáreas y el segundo que la superficie era de 3-00-00 hectáreas, por otra parte el segundo de los manifestantes argumentó que no sabía por qué había abandonado la parcela Santiago Alvarado hacía como veinte años, por que no estaba en el ejido (al contestar la quinta pregunta), pero al contestar la onceava pregunta agregó que la parcela en conflicto la tiene en posesión desde hace veinte años (sic.) Mateo García Salaya, lo que está en franca contradicción con la respuesta anterior.

Las autoridades internas del ejido presentaron como testigos a los CC. Antonio López Ramos y Leobardo Santiago López, habiéndoseles recibido sus testimonios en la audiencia de pruebas y alegatos de fecha dieciséis de octubre de mil novecientos ochenta, y el primero de los atestos declaró que sí conoce al ejido "Pedro C. Colorado", desde el año de mil novecientos sesenta en que ingresó al ejido; que sí conoce a Santiago Alvarado Rosaldo, no así a la señora Clara Alpuche de Alvarado y a Julio Alvarado Alpuche lo acaba de conocer (sic.); que ninguna de las personas antes mencionadas han cultivado alguna parcela en el ejido y que tampoco viven en el mismo y nunca han vivido, por lo tanto nunca han tenido la posesión de ninguna parcela; que sí conoce a Mateo García Salaya, quien tiene la posesión de la parcela en controversia con Santiago Alvarado, y la parcela que tiene Mateo García Salaya es la de Santiago Alvarado Rosaldo; que Mateo García la está poseyendo desde hace veinte años y que actualmente no está en posesión de la parcela porque se encuentra en pugna (sic.); que no está muy al tanto (sic.) pero que tiene como dos años que no está en posesión (Mateo García); que sabe que se practicó una investigación de usufructo parcelario ejidal, sin recordar la fecha y que se le inició juicio privativo a Santiago Alvarado y sus sucesores, ya que abandonaron la parcela y que la asamblea de ejidatarios no tiene acuerdo (sic.) a favor de Santiago Alvarado Rosaldo y la razón de su dicho es porque es miembro del ejido.

El testimonio del atesto antes mencionado, resultó contradictorio toda vez que al contestar a las preguntas de la cinco a la once, que se le formularon, manifestó que Santiago Alvarado Rosaldo y sus sucesores nunca han cultivado parcela alguna en el ejido, tampoco han vivido en él y no tienen ninguna posesión de alguna unidad de dotación; pero después declaró que la parcela que tiene Mateo García Salaya es la de Santiago Alvarado Rosaldo (foja 329 de autos), y que actualmente se encuentra en pugna (sic.) y que desde hace dos años no la tiene en posesión Mateo García. En tal virtud resultó ineficaz su testimonio.

El segundo de los manifestantes declaró que conoce al ejido "Pedro C. Colorado", desde hace veintitrés años en que le otorgaron su parcela ejidal; que únicamente conoce a Santiago Alvarado Rosaldo, no así a Clara Alpuche de Alvarado y a Julio Alvarado Alpuche, los cuales no han cultivado ninguna parcela; que no sabe si vivió en el ejido, tampoco sabe desde cuándo viven en ese núcleo agrario ni cómo llegaron; que sabe que se introdujeron a la parcela que tiene el C. Mateo García desde hace un año o más; que no sabe si han realizado algún cultivo dentro de la parcela; que sí conoce a Mateo García, el cual tenía una parcela y es en la que actualmente se encuentran los señores Alvarado Alpuche; que no sabe a quien pertenezca esa parcela ejidal, aunque dijo que la posee Mateo García desde hace veinte años; y como razón de su dicho manifestó que es ejidatario y se encuentra afectado por el problema (sic.).

Del testimonio anterior se advierte que el testigo incurrió en contradicciones, toda vez que manifestó que el citado Santiago Alvarado Rosaldo y sus sucesores no han cultivado alguna parcela ejidal, pero agregó que actualmente están en posesión de la parcela que tenía Mateo García Salaya, sin saber a quién le corresponde esa unidad parcelaria y por último manifestó que no debe de haber ejidatarios que abandonen su parcela y transcurrido el tiempo regresen y la recuperen, en clara alusión a la parcela en conflicto que originalmente poseyó Santiago Alvarado. Además manifestó que se encuentra afectado por el problema, demostrando con ello interés en la resolución de este asunto para alguna de las partes y su dicho por ser parcial carece de credibilidad.

V.- Miguel Alvarado Alpuche compareció ante la Comisión Agraria Mixta en el Estado mediante recurso que presentó el día veintidós de agosto de mil novecientos setenta y nueve (fojas 214 a 219 íd.), en su carácter de apoderado general para pleitos y cobranzas del señor Santiago Alvarado Rosaldo, según lo acreditó con la escritura pública número 992, pasada ante la fe del Notario Público número Uno con residencia en la ciudad de Cárdenas, Tabasco, para ofrecer pruebas y formular los alegatos correspondientes en el juicio de privación de derechos agrarios que se sigue en contra de su señor padre; habiendo argumentado lo siguiente:

El C. Santiago Alvarado Rosaldo es ejidatario con derechos reconocidos en el ejido denominado "Pedro C. Colorado", del Municipio de Huimanguillo, Tabasco, según lo acredita con la copia fotostática del certificado de derechos agrarios número 101132, y del que se desprende que esa calidad la tiene desde el día trece de septiembre de mil novecientos treinta y nueve, y desde esa fecha siempre ha trabajado en forma pacífica pública y continua su unidad parcelaria, hasta el año de mil novecientos setenta y cuatro en que se enfermó, habiendo comenzado a laborar la parcela el citado Miguel Alvarado Alpuche. Y es el caso que las autoridades internas del ejido han perturbado la posesión de la misma, e inclusive se privó de sus derechos agrarios a Santiago Alvarado Rosaldo por lo que promovieron juicio de amparo, habiendo obtenido la protección de la justicia federal para el efecto de que se repusiera el procedimiento.

Manifestó además que fue propuesto como nuevo adjudicatario Leobardo Santiago López, y que el señor Mateo García Salaya también dice que está en posesión de la parcela de Santiago Alvarado Rosaldo, sin que esto se apegue a la realidad, ya que son los miembros tanto del Comisariado Ejidal como del Consejo de Vigilancia, quienes tienen la posesión del predio en controversia, ya que están haciendo un fraccionamiento y la profesora Edith Jiménez Zamora se encuentra construyendo un colegio privado en terrenos de la parcela ejidal. Que en la actualidad únicamente tiene la posesión de 2-00-00 hectáreas, porque las autoridades ejidales lo despojaron de las 8-00-00 hectáreas restantes. Para acreditar su dicho ofreció las siguientes pruebas:

1.- Copia certificada de la constancia expedida por el Secretario Municipal del Comité Administrativo de Huimanguillo, Tabasco, de fecha veintisiete de julio de mil novecientos setenta y nueve (foja 220 de autos), en la que se asentó que Santiago Alvarado Rosaldo es originario y vecino del ejido "Pedro C. Colorado", y quien siempre ha radicado en dicho lugar. Documental con la que se demuestra que el citado Santiago Alvarado siempre ha vivido en el mencionado poblado, y que se valora de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia.

2.- Copia certificada de la ejecutoria del toca de revisión número 345/977, dictada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, de fecha seis de septiembre de mil novecientos setenta y ocho (fojas 224 a 229 de autos), y de la que se desprende que la Justicia de la Unión ampara y protege a Santiago Alvarado Rosaldo en contra de los actos que reclamó del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, del Secretario de la Reforma Agraria, del Director General de Derechos Agrarios, del Director General del Registro Agrario Nacional, todos con residencia en la ciudad de México, Distrito Federal y del Delegado de la Secretaría de la Reforma Agraria, con residencia en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, habiendo consistido el acto reclamado en la privación de sus derechos agrarios, sin que se le hubiere concedido la garantía de audiencia, de acuerdo a la Resolución Presidencial de fecha veintinueve de noviembre de mil novecientos setenta y seis. Documental que hace prueba plena de acuerdo a lo ahí resuelto.

3.- Copia debidamente autorizada de la escritura número 992, de fecha dieciocho de mayo de mil novecientos setenta y nueve (fojas 222 íd.), que contiene el poder otorgado ante fedatario público por Santiago Alvarado Rosaldo, en favor de Miguel Alvarado Alpuche. Documental con la que acredita la personalidad con la que actúa el último de los nombrados.

4.- Copia de la constancia de registro de derechos agrarios individuales en ejidos, expedida por la Dirección General del Registro Agrario Nacional del veinticinco de septiembre de mil novecientos setenta y ocho (foja 230 de autos) y en la cual aparece Santiago Alvarado inscrito como ejidatario del poblado "Pedro C. Colorado", Municipio de Huimanguillo, Tabasco, con certificado de derechos agrarios número 101132, y con sucesores registrados Clara Alpuche y Julio Alvarado. Documental que hace prueba plena en los términos del artículo 444 de la Ley Federal de Reforma Agraria, vigente en la fecha en que se expidió esa constancia.

5.- Copia certificada del instrumento notarial de fe de hechos e inspección ocular practicada el siete de febrero de mil novecientos setenta y nueve (foja 233), por el Notario Público número Uno, con residencia en la ciudad de Cárdenas, Tabasco, llevada a cabo a solicitud del citado Santiago Alvarado, habiendo hecho constar el fedatario público entre otras cosas, que se constituyó en la parcela usufructuada por aquél quien tiene ahí construida una casa habitación de block y techo de lámina, que el terreno se encuentra sembrado en una extensión aproximada de 2-00-00 has. de árboles de mango, café, plátano y naranja, que en la parte posterior existe un borde o camellón que divide la parcela, el cual está precedido por un sembradío de "pitaes" y que según le informan los testigos existen 8-00-00 hectáreas más del otro lado del camellón, donde no existe ninguna construcción. Prueba que se valora en los términos del artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, y por la que se tienen por realizadas las manifestaciones ahí reseñadas.

6.- Copia debidamente autorizada del certificado de derechos agrarios número 101132, expedido a favor de Santiago Alvarado con fecha tres de abril de mil novecientos cuarenta y dos (foja 456 de autos), y en el

cual consta los nombres de Clara Alpuche y Julio Alvarado como sucesores. Prueba documental con la que acredita su calidad de ejidatario en el poblado que aquí interesa.

7.- Copia autorizada de la constancia expedida por el Secretario General del Ayuntamiento de Huimanguillo, de fecha tres de marzo de mil novecientos ochenta y uno (foja 467 de autos), en la que hace constar la vecindad de Santiago Alvarado Rosaldo en una parcela ubicada en la prolongación oriente de la calle Independencia de esa población. Prueba documental con la que se demuestra lo ahí relatado.

8.- Copia del escrito que suscribió José Ramos de la Cruz, Secretario del Ramo Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Huimanguillo, Tabasco, de fecha dieciséis de diciembre de mil novecientos ochenta (foja 468 íd.), por el que hace constar que mediante auto de fecha doce de julio de mil novecientos setenta y nueve se ordenó el archivo del expediente penal número 1/979 que se instruyó en contra de Miguel, Nicolás y Félix Alvarado Alpuche, por haber causado ejecutoria la resolución del Juzgado de Distrito. Documental por la que se tienen por realizadas las aseveraciones mencionadas.

9.- Constancia expedida por el Tesorero Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Huimanguillo, Tabasco, de fecha catorce de octubre de mil novecientos ochenta (foja 474 íd.), en la que se asentó que Santiago Alvarado Rosaldo no figura como comerciante en ese municipio, ya que no existe ningún documento en los archivos de esa tesorería de su cargo, al respecto. Prueba con la que se demuestra lo ahí señalado.

10.- Copia del oficio número 1496, de fecha veintiséis de marzo de mil novecientos setenta, por medio del cual la Delegación Agraria en el Estado, le comunica al Comisariado Ejidal del poblado de referencia, que deberá respetar los derechos de Santiago Alvarado. Prueba de la que se advierte lo ahí mencionado.

11.- Copia certificada del acta de defunción de Santiago Alvarado Rosaldo (foja 457 de autos), en la que se hace constar que falleció el día veintiuno de septiembre de mil novecientos ochenta y uno. Prueba documental con la que se acredita el deceso de dicha persona.

12.- Copia autorizada de la escritura número 258 pasada por la fe del Notario Público número Uno, con residencia en la Ciudad de Cárdenas, Tabasco, de fecha veintiocho de julio de mil novecientos setenta y siete (foja 473), en la cual se hace constar la comparecencia de Leobardo Santiago López, manifestando que hacía veinte años que venía poseyendo una parcela con una superficie de una hectárea y media, ubicada en el ejido "Pedro C. Colorado" del Municipio de Huimanguillo, Tabasco, y que tiene conocimiento que se ha emitido una Resolución Presidencial en el sentido de concederle la posesión de una superficie distinta a la que viene poseyendo, sobre la cual no tiene ningún interés ya que pertenece a otra persona. Prueba con la que se demuestra la declaración vertida por el propuesto como nuevo adjudicatario por el Decreto Presidencial, que privó de sus derechos agrarios a Santiago Alvarado.

13.- Copia autorizada de la resolución emitida por el Juez Primero de Distrito en el Estado de fecha doce de febrero de mil novecientos ochenta y uno (fojas 469 a 472 íd.), en el recurso de queja, deducida del juicio de amparo número 251/977, habiéndose resuelto procedente y fundado el citado recurso, para el efecto de que la Comisión Agraria Mixta cumplimente en sus términos la ejecutoria emitida por el Tribunal Colegiado del Décimo Circuito.

14.- Copia del escrito que suscribió el ingeniero Feliciano Aguilera Vera, adscrito a la Comisión Agraria Mixta en el estado al cual se le ordenó practicar una investigación en la unidad parcelaria en conflicto, de fecha dieciséis de noviembre de mil novecientos setenta y nueve (foja 260 de autos), y del que se desprende que tanto el Presidente del Comisariado Ejidal como el del Consejo de Vigilancia le manifestaron que no estaban conformes en que realizara la inspección ocular, en la unidad parcelaria de 10-00-00 hectáreas del C. Santiago Alvarado Rosaldo, por lo que no pudo llevar a cabo la inspección ordenada. Documental con la que se demuestra la negativa de las autoridades internas del ejido para que se practicara la inspección solicitada.

15.- Escrito de fecha trece de diciembre de mil novecientos setenta y nueve (foja 263 íd), que suscribió el ingeniero comisionado Feliciano Aguilera Vera, manifestando que realizó la inspección ocular en la parcela del C. Santiago Alvarado, habiendo constatado (sic.) que tiene una extensión de 2-00-00 hectáreas, y está cultivada por árboles frutales y según dijeron las autoridades del ejido fue sembrada por Mateo García y agregaron que Alvarado Rosaldo solicita se le adjudique una parte del campo aéreo, el cual está destinado para la zona urbana, encontrándose además la casa ejidal y edificios en construcción; también señaló que existe una casa de block y lámina recientemente construida. Las manifestaciones antes señaladas, se encuentran en franca contradicción con lo señalado en el escrito que antecede, suscritos ambos por el mismo comisionado.

16.- Declaración de Santiago Alvarado Rosaldo practicada en la audiencia de pruebas y alegatos de fecha veintidós de agosto de mil novecientos setenta y nueve (fojas 237 y 238 de autos), y de la que se desprende que manifestó que nunca se ha separado del ejido "Pedro C. Colorado", y que ahí se crearon todos sus hijos; que la directiva del ejido no lo ha podido ver (sic.) por que se dedica a la agricultura; que su parcela mide 10-00-00 hectáreas, teniendo 2-00-00 hectáreas cultivadas de plátano, café y árboles frutales, y que el resto de la superficie la tiene en posesión el ejido; que debido al problema que confronta, no coopera con el ejido.

17.- También ofreció el testimonio de Concepción Méndez Alejandro, el cual con fecha treinta de agosto de mil novecientos setenta y nueve (fojas 242 y 243), rindió su declaración habiendo testificado que conoce a Santiago Alvarado Rosaldo desde hace cuarenta y cinco años, ya que es ejidatario del poblado "Pedro C.

Colorado", y trabaja su parcela la cual tiene una superficie de 10-00-00 hectáreas y nunca ha dejado de cultivar su unidad de dotación.

En similares términos se expresó el declarante Toribio Sánchez Gamas (fojas 246 y 247). Testimoniales que resultaron benéficas para el citado Santiago Alvarado Rosaldo, ya que acreditaron que dicha persona nunca se ausentó del ejido y trabajó siempre su unidad parcelaria.

VI.- Este Tribunal le comunicó a la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra la existencia de este juicio agrario, para el efecto de que remita los antecedentes al respecto y para que manifieste lo que a su derecho conviniera; por tal motivo, mediante recurso de fecha veintiocho de mayo de mil novecientos noventa y seis, compareció el C. Lic. Gerardo Calzada Sivilla (fojas 155 a 157 de autos), manifestando que efectivamente, el Ejecutivo Federal mediante Decreto Presidencial dictado con fecha veintiuno de diciembre de mil novecientos setenta y nueve, publicado en el **Diario Oficial de la Federación** el cuatro de febrero de mil novecientos ochenta, expropió por causas de utilidad pública una superficie de 40-86-27 has., al ejido denominado "Pedro C. Colorado", Municipio de Huimanguillo, estado de Tabasco, y en favor de la citada comisión.

Argumentó que la superficie reclamada fue expropiada a favor de su representada, sustrayéndola del régimen ejidal y por lo tanto, este órgano jurisdiccional no tenía competencia para conocer del asunto, toda vez que ya no se surtía a su favor la competencia establecida por la fracción XIX del artículo 27 constitucional; y tampoco eran aplicables los numerales 1, 2, 163 y 164 de la Ley Agraria. Cabe considerar que el punto controvertido en el presente juicio es la procedencia o improcedencia y de la inconformidad presentada por Clara Alpuche, en contra de la Resolución de la Comisión Agraria Mixta, de fecha treinta de septiembre de mil novecientos ochenta y cinco, que la privó de sus derechos agrarios sucesorios, y no la propiedad del predio antes mencionado, ya que ello es una consecuencia de lo anterior.

Se considera desfasado jurídicamente el argumento que formuló el representante de la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra, toda vez que en el presente juicio agrario se examina la legalidad del procedimiento seguido ante la extinta Comisión Agraria Mixta, así como la resolución dictada por ésta, y los puntos de discrepancia argumentados por los inconformes, en referencia a los elementos probatorios que las partes aportaron, o dicho de otra manera, si fue procedente y fundada la cancelación del certificado de Santiago Alvarado Rosaldo por fallecimiento de éste, y la privación de sus derechos agrarios sucesorios de Clara Alpuche viuda de Alvarado y Julio Alvarado Alpuche, o lo contrario si fue legalmente infundada la resolución de la citada Comisión Agraria Mixta; es decir, no se estudia ni valora la naturaleza jurídica de la superficie que pudo haber pertenecido a Santiago Alvarado y en la actualidad a sus sucesores.

VII.- Clara Alpuche Calderón y Miguel Alvarado Alpuche, comparecieron ante la Sala Regional del Cuerpo Consultivo Agrario con residencia en Campeche, Campeche, el veinticinco de noviembre de mil novecientos ochenta y cinco (fojas 110 a 115 de autos) promoviendo recurso de inconformidad en contra de la Resolución emitida por la Comisión Agraria Mixta el treinta de septiembre de mil novecientos ochenta y cinco y manifestaron que les causaba agravios la resolución combatida, ya que la privación que se pretende llevar a cabo debe basarse en el acta de investigación general de usufructo parcelario ejidal de fecha veintidós de septiembre de mil novecientos setenta y cuatro, y en la cual se propuso privar a Santiago Alvarado y a sus sucesores Clara Alpuche y Julio Alvarado Alpuche por haber abandonado la parcela, y propusieron como nuevo adjudicatario a Leobardo Santiago López, ya que manifestaron la venía trabajando por más de dos años consecutivos.

Argumentaron que el C. Leobardo Santiago López declaró expresamente ante un Notario Público que él se encuentra trabajando su fracción ejidal que es diferente a la que se le trata de adjudicar, y que no tiene ningún interés en que se le reconozca posesión alguna en otra parcela, ya que pertenece a persona distinta. Indicando que ante esa situación se concluye que desde el inicio del juicio privativo de derechos agrarios, éste se encontraba infundado, ya que la parcela se le adjudicaba a una persona que viene trabajando su unidad de dotación diferente a la que perteneció a Santiago Alvarado y por tal motivo queda claro que los integrantes del Comisariado Ejidal actúan de mala fe en perjuicio de ellos. Y que la resolución de la Comisión Agraria Mixta no puede declarar una parcela vacante; además agregaron que Santiago Alvarado nunca se desavencinó del ejido y tampoco dejó de trabajar la parcela en conflicto, ya que ellos viven en la parcela y la tienen en explotación con árboles frutales, que por su propia naturaleza no son cultivos de renovación anual y por lo tanto en la resolución emitida por la citada Comisión Agraria, no valoró todas y cada una de las pruebas que se aportaron y que obran en el expediente, sino que únicamente formuló una relación de ellas. Concluyendo que al no fundamentar la adjudicación, no es posible fundamentar también la privación de derechos agrarios que pretende efectuar la multicitada Comisión Agraria Mixta, además de que insistieron en que no se valoró todo el acervo probatorio de los elementos de convicción que presentaron.

A este respecto cabe considerar que son fundados los agravios expresados por los inconformes, toda vez que efectivamente en la asamblea de privación de derechos agrarios y nuevas adjudicaciones llevada a cabo el veintidós de septiembre de mil novecientos setenta y cuatro, efectivamente se trató con el caso número veinte (fojas 168, y que se transcribe):

"Caso núm. 20 crtf. núm.-101132-titular-SANTIAGO ALVARADO.- sucesores CLARA ALPUCHE, JULIO ALVARADO ALPUCHE.- El titular y sus sucesores abandonaron la unidad de dotación por más de dos años,

por lo que se solicita se les inicie juicio privativo de sus derechos. Y considerando que al quedar abandonada esta parcela el C. Leobardo Santiago López, la ha venido usufructuando por más de dos años, la propia asamblea propone el reconocimiento de derechos agrarios a su favor."

De lo anterior se advierte que sí fue propuesto como nuevo adjudicatario el C. Leobardo Santiago López, quien expresamente ante fedatario público manifestó no tener interés en esta parcela, ya que no la trabaja, puesto que él cuenta con su unidad parcelaria diferente a la que se le trata de adjudicar, la cual manifestó que inclusive es de una persona distinta; por lo que queda claro para este Juzgador que desde su origen el juicio privativo de derechos agrarios en contra de Santiago Alvarado Rosaldo adoleció de anomalías jurídicas, puesto que no es dable que se proponga a una persona como nuevo adjudicatario, argumentando que es el que la ha venido trabajando (la unidad de dotación) y el propuesto, en este caso Leobardo Santiago, manifieste que él no ha trabajado esa parcela, ya que posee una diferente a la que se le trata de adjudicar.

En la resolución de la Comisión Agraria Mixta, sobre la cual se inconformaron, se advierte que no valoró las pruebas aportadas, en lo referente a los testimonios vertidos por los señores Antonio López Ramos, Leobardo Santiago López e Isabelino Bautista Morales, quienes declararon que la unidad de dotación había sido abandonada por más de dos años consecutivos, por el ejidatario Santiago Alvarado Rosaldo, pero sin haberse desavecinado del lugar (sic.) conceptos diferentes, según la citada Comisión y que trató de encuadrar de acuerdo a lo señalado por la fracción I del artículo 85 de la Ley Federal de Reforma Agraria, lo que no es concordante con la realidad, toda vez que en la parcela que detentaba Santiago Alvarado Rosaldo, se encontraba su domicilio o casa habitación, así como el huerto y árboles frutales que fueron sembrados por el finado ejidatario y que los cultivaba en compañía de su familia.

Por otra parte, carece de veracidad la resolución combatida, al manifestar en su resultando tercero que se notificó el cuatro de mayo de mil novecientos ochenta y dos a Santiago Alvarado Rosaldo y sucesores para que comparecieran a la audiencia de pruebas y alegatos que tendría verificativo el día veintiocho de ese mismo mes y año; y que además no fue necesario levantar el acta de desavecinado, "en virtud de que el señor Santiago Alvarado Rosaldo, no se encontraba desavecinado del ejido, y fue posible notificarle para la audiencia de pruebas y alegatos" (foja 564). Cabe recalcar que el señor Santiago Alvarado Rosaldo falleció el día veintiuno de septiembre de mil novecientos ochenta y uno, según copia certificada del acta de defunción expedida por el Oficial del Registro Civil y visible en la foja 457 de autos; por lo que no es posible que se haya llevado a cabo la notificación antes mencionada y que por lo tanto no se le haya levantado el acta de desavecinado, puesto que físicamente ya había desaparecido.

De lo anterior se advierte que no se logró demostrar la desavecinado del señor Santiago Alvarado Rosaldo, ya que cuando la Comisión Agraria Mixta trató de comprobar la causal de privación de derechos agrarios que establecía el citado artículo 85 en su fracción I de la entonces vigente Ley Federal de Reforma Agraria, éste ya había fallecido. Y de acuerdo a lo manifestado anteriormente, las actuaciones llevadas a cabo por la citada Comisión Agraria Mixta en el año de mil novecientos setenta y cuatro, habiendo culminado dicho procedimiento con la Resolución Presidencial de fecha veintinueve de noviembre de mil novecientos setenta y seis, fueron dejadas sin efectos por el Tribunal Colegiado del Décimo Circuito con residencia en esta ciudad, en la ejecutoria dictada en el toca número 345/978, el día seis de febrero de mil novecientos setenta y ocho; habiéndose cumplimentado la misma hasta el día treinta de septiembre de mil novecientos ochenta y cinco, por lo que se inconformó Clara Alpuche viuda de Alvarado y Miguel Alvarado Alpuche.

En la resolución combatida, tampoco se acreditó la desavecinado de los sucesores de Santiago Alvarado Rosaldo, o sea de su señora Esposa Clara Alpuche viuda de Alvarado y Miguel Alvarado Alpuche, ya que éstos comprobaron su vecindad en una casa construida en terrenos de la parcela en conflicto y que habitan hasta este momento. Se hace referencia a que la prueba confesional que ofreció Clara Alpuche, le fue desechada por la Comisión Agraria Mixta, ya que se argumentó que el pliego de posiciones no contenía hechos propios que pudiera ser materia de la confesional; únicamente se recibió el testimonio de Antonio López Ramos, Leobardo Santiago López e Isabelino Bautista Morales, quienes declararon que efectivamente Santiago Alvarado Rosaldo cultiva su parcela en compañía de su familia, pero sobre todo de su hijo Miguel Alvarado Alpuche.

Y en la resolución combatida se acordó también privar de sus derechos agrarios sucesorios a Clara Alpuche Calderón y Miguel Alvarado Alpuche, quienes acreditaron con las pruebas testimoniales estar habitando la casa ubicada en la parcela en conflicto y la cual se les pretende privar, y además mediante el acta notarial que levantó el fedatario público número Uno licenciado Mario Espinosa Castillo, de fecha veintiocho de julio de mil novecientos setenta y siete, en la que da fe de los hechos que pudo apreciar al respecto y que se valora únicamente como una relación de hechos, narrada por un fedatario público, y no como una prueba confesional.

Este Juzgador comparte el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en materia administrativa del Tercer Circuito, en su jurisprudencia consultable en el Semanario Judicial de la Federación.- novena época.- tomo I, mayo de 1995, página 406, y que es del tenor literal siguiente:

"SUCESORES. PROCEDIMIENTO PRIVATIVO DE DERECHOS AGRARIOS, NO ES CORRECTO INSTAURARLO EN CONTRA DE LOS.

El procedimiento privativo de derechos agrarios no debe instaurarse en contra de los sucesores del titular de derechos agrarios, pues la litis correspondiente se construye a determinar si el afectado por la posible privación incurrió en alguna de las causas establecidas en el artículo 85 de la Ley Federal de Reforma Agraria. Por otra parte, en caso de proceder la privación de una unidad de dotación, ésta debe adjudicarse a quien legalmente aparezca como heredero, conforme lo dispuesto por el numeral 86 de la precitada Ley Federal de Reforma Agraria. Lo anterior siempre y cuando no existan derechos posesorios que se hagan valer en oposición al respecto."

Así las cosas, se considera improcedente la privación de sus derechos sucesorios de los señores Clara Alpuche y Julio Alvarado Alpuche, ya que no se acreditó la causal de privación prevista en el artículo 85 fracción I de la Ley Federal de Reforma Agraria, puesto que no se demostró con ningún elemento de convicción que efectivamente hubieren abandonado su unidad de dotación. Se considera necesario transcribir el citado numeral:

"Art. 85.- El ejidatario o comunero perderá sus derechos sobre la unidad de dotación y, en general, los que tenga como miembro de un núcleo de población ejidal o comunal, a excepción de los adquiridos sobre el solar que le hubiere sido adjudicado en la zona de urbanización, cuando:

I.- No trabaje la tierra personalmente o con su familia, durante dos años consecutivos o más, o deje de realizar por igual lapso los trabajos que le correspondan, cuando se haya determinado la explotación colectiva, salvo en los casos permitidos por la ley;"

De una correcta interpretación al numeral antes transcrito, se advierte que no menciona la privación de los derechos agrarios de los sucesores y por lo tanto carece de sustento jurídico la resolución de la Comisión Agraria Mixta en su resolutivo segundo, en la cual privó de sus derechos agrarios sucesorios a los citados Clara Alpuche y Julio Alvarado Alpuche.

Es prudente considerar que el ejido "Pedro C. Colorado", Municipio de Huimanguillo, Estado de Tabasco, fue constituido por una Resolución Presidencial dotatoria, de fecha trece de septiembre de mil novecientos treinta y nueve, publicada en el **Diario Oficial de la Federación** el día seis de diciembre de ese mismo año, con una superficie de 456-00-00 hectáreas, para beneficiar a cincuenta y tres capacitados en materia agraria. Y posteriormente fue ampliado mediante Resolución Presidencial de ocho de julio de mil novecientos ochenta y seis, publicada en el **Diario Oficial de la Federación** el seis de agosto de ese mismo año, con una superficie de 32-88-97 hectáreas para beneficiar a veintiún capacitados. En fechas posteriores ha sufrido varias expropiaciones, primeramente fue por Decreto Presidencial del veintiuno de diciembre de mil novecientos setenta y nueve, publicado en el **Diario Oficial de la Federación** el cuatro de febrero de mil novecientos ochenta, habiéndosele expropiado una superficie de 40-86-27 hectáreas, a favor de la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra, para destinarse a su regularización mediante la venta a los avendados de los solares que ya ocupan; y por Decreto Presidencial de fecha veinticuatro de noviembre de mil novecientos noventa y tres, publicado en el **Diario Oficial de la Federación** el doce de enero de mil novecientos noventa y cuatro, se le expropió una superficie de 1-22-12 hectáreas, a favor de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para destinarse al derecho de vía necesario para la construcción de la carretera camino urbano de Huimanguillo, Tabasco, tramo acceso puente-Huimanguillo.

En este orden de ideas, se considera prudente formular en primer lugar la siguiente reflexión; el ejido que aquí interesa fue dotado de tierras con una superficie total de 488-88-97 hectáreas, incluyendo la superficie concedida por primera ampliación de ejido, para beneficiar a setenta y cuatro capacitados en materia agraria, tanto en la dotación como en la ampliación; en el ejido en comento no ha habido parcelamiento oficial y el que tiene en forma económica no puede ser de una unidad parcelaria de 10-00-00 en lo individual, ya que la superficie no alcanzaría para otorgar una parcela a cada uno de los capacitados; por lo tanto, este juzgador estima que son ciertas las afirmaciones formuladas por los representantes del ejido, consistentes en que las unidades de dotación tienen de 2-00-00 a 3-00-00 hectáreas, y no es veraz lo afirmado por Santiago Alvarado y los testigos de que su parcela contaba con una superficie de 10-00-00 hectáreas.

En segundo lugar, se tiene que con la primera expropiación a favor de la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra, se expropió entre otra superficie, la fracción ejidal que perteneció al extinto ejidatario Santiago Alvarado Rosaldo, en su totalidad y la resolución de la Comisión Agraria Mixta, combatida en este juicio de inconformidad, ordenó que la indemnización correspondiente se le otorgara al ejido "Pedro C. Colorado", Municipio de Huimanguillo, Estado de Tabasco.

Tomando en consideración lo ordenado por el resolutivo tercero del citado fallo de la Comisión Agraria Mixta, en que se acordó que el ejido "Pedro C. Colorado", Municipio de Huimanguillo, Estado de Tabasco, sea el beneficiado con la indemnización correspondiente con motivo de la expropiación de los terrenos ejidales hechos por causa de utilidad pública en favor de la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra, según decreto expropiatorio de fecha veintiuno de diciembre de mil novecientos setenta y nueve, publicado en el **Diario Oficial de la Federación** el cuatro de febrero de mil novecientos ochenta, es prudente que el ejido mencionado, por conducto de sus órganos de representación interna, le reintegren una superficie de 2-00-00 hectáreas a la C. Clara Alpuche viuda de Alvarado, en alguna de las parcelas que hubieren sido declaradas vacantes y si no existen, esa superficie se tomará de los terrenos dedicados para los usos comunes del citado núcleo agrario.

De conformidad con el artículo 433 de la Ley Federal de Reforma Agraria, que es la legislación que se aplica en este sumario, esta resolución deberá de publicarse en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco, así como en el **Diario Oficial de la Federación**; debiendo de remitirse una copia debidamente autorizada al Registro Agrario Nacional para los efectos de su inscripción y la expedición del certificado correspondiente.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Tribunal Unitario Agrario del Distrito Veintinueve,

RESUELVE:

PRIMERO.- Resultaron procedentes y fundados los agravios hechos valer por la recurrente Clara Alpuche viuda de Alvarado, en el recurso de inconformidad interpuesto, en contra de la Resolución de la Comisión Agraria Mixta en el estado de fecha treinta de septiembre de mil novecientos ochenta y cinco, presentado ante la Consultoría Regional del Cuerpo Consultivo Agrario con residencia en la ciudad de Campeche, Campeche, de acuerdo a lo vertido en los puntos considerativos de esta sentencia.

SEGUNDO.- En consecuencia, se revoca la resolución combatida, ya que carece de sustento jurídico la privación de los derechos agrarios sucesorios de Clara Alpuche viuda de Alvarado, a quien se le deberá de otorgar una superficie de 2-00-00 hectáreas de terrenos ejidales, de acuerdo a lo manifestado en el último de los considerandos, por conducto del comisariado ejidal del poblado "Pedro C. Colorado", Municipio de Huimanguillo, Estado de Tabasco.

TERCERO.- Publíquense: esta resolución en el **Diario Oficial de la Federación**, así como en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco, y gírese una copia de la misma al Registro Agrario Nacional para los efectos consignados en el considerando séptimo de este fallo.

CUARTO.- Remítase una copia certificada de esta sentencia al Magistrado Presidente del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, por la que se da cumplimiento a la ejecutoria pronunciada en el amparo directo número 766/996.

QUINTO.- Notifíquese personalmente esta sentencia a Clara Alpuche viuda de Alvarado y a los integrantes del comisariado ejidal del poblado de referencia, y archívese este expediente como asunto concluido.

Villahermosa, Tab., a quince de mayo de mil novecientos noventa y ocho.- Así, definitivamente lo resuelve y firma el ciudadano Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Vigésimo Noveno Distrito, Quinto Circuito, licenciado **Dionisio Vera Casanova**, ante el Secretario de Acuerdos el licenciado **Saúl Duarte Franco**, quien da fe.- Rúbricas.